

VENEZUELA Y LA “REVOLUCION BOLIVARIANA”.

Aníbal Romero

(2001)

El fin del sistema político imperante en Venezuela entre 1958 y 1998 fue un proceso gradual, y no ocurrió de manera abrupta y tajante. Se trataba de un sistema con ciertos rasgos particulares, que en no poca medida le distinguieron por buen tiempo de otros regímenes de raigambre populista en América Latina. El principal factor de diferenciación con respecto a otras realidades regionales fue la abundancia de recursos fiscales provenientes del control del petróleo por parte del Estado, abundancia que hizo posible por años evadir complejos dilemas y postergar decisiones difíciles. El segundo fue la sólida concertación entre las élites —políticas, empresariales, laborales, militares y de la jerarquía católica—, que predominó durante los tiempos de formación del nuevo régimen y se prolongó hasta las postrimerías de la década de los ochenta. Esa concertación, al tiempo de proporcionar estabilidad al sistema, le hizo también renuente al cambio.

El deterioro en la eficacia de estos dos factores, considerados como elementos integradores de sustentación del régimen, constituyó la causa fundamental de su decadencia y agotamiento. En primer término, si bien el petróleo siguió suministrando importantes recursos a los diversos gobiernos democráticos, en medio de los recurrentes vaivenes del precio del crudo en los mercados mundiales, el modelo de desarrollo basado en las grandes inversiones públicas y la multiplicación de la burocracia estatal como fuente de empleo acusó síntomas de asfixia desde la propia década de los setenta. Numerosos estudiosos han destacado a Venezuela como un caso especialmente grave de “enfermedad holandesa”, un mal que se patentiza a través de los efectos perniciosos que el avasallante predominio de un recurso natural ocasiona al resto de las actividades económicas. De hecho, en Venezuela se puso de manifiesto, con particular fuerza a partir de 1974-5, una dinámica patológica mediante la cual mientras más petróleo producíamos y a más altos precios le vendíamos, más se distorsionaba la economía y más crecía el empobrecimiento de las mayorías.

Las grandes expectativas de mejoramiento económico y progreso social de la población, convencida de que el país es inmensamente rico debido a su petróleo y otros recursos naturales, y crecientemente frustrada ante la evidencia de su atraso, comenzaron a aumentar a medida que la dirigencia democrática se empeñaba en repetir sistemáticamente sus errores. Por una parte, el error de creer que el Estado, prácticamente por sí sólo y a través del gasto público inflado por el petróleo, era capaz de desarrollar la economía y proveer eficazmente empleos, servicios sociales y seguridad a una población empujada

al parasitismo por el propio paternalismo gubernamental. Por otra parte, la dirigencia democrática, a lo largo de diversas campañas electorales entre 1973 y 1993 no hizo sino reforzar de manera exagerada las ilusiones de la gente, mostrándose incapaces todos los candidatos de los partidos políticos fundamentales de llevar a cabo una labor pedagógica con respecto a un pueblo confundido, apegado al mito de que la riqueza no es algo que se crea mediante el trabajo y el esfuerzo, sino que es una dádiva de la naturaleza que debe ser distribuída con equidad por gobernantes justos y sabios.

Si se analizan los estudios de opinión generados por diversas empresas especializadas en la Venezuela de esos tiempos, se percibe claramente que la erosión del apoyo popular hacia el régimen comienza a reflejarse de manera clara a principios de los años ochenta, en tanto que empieza también a agudizarse el retroceso en los niveles de vida de las mayorías. Dicho en otros términos, el apoyo al régimen y a los dos partidos clave del mismo (socialdemócrata y demócratacristiano), se sostuvo a niveles bastante elevados en tanto se prolongó el proceso de expansión económica y movilidad social ascendente, hasta fines de los setenta. Desde entonces se inició un declive, que alcanzó su culminación en 1998. Esos dos grandes partidos tuvieron en sus manos la responsabilidad fundamental en el diseño constitucional y desarrollo operativo-político del régimen desde 1958-9. Se trataba, en sus comienzos, de partidos con fuerte contenido ideológico, pluriclasistas y arraigados a lo largo y ancho del país. Sus principales líderes, conscientes de la necesidad de conciliar intereses y construir una democracia pluralista con base en el consenso, promovieron una democracia “pactada” orientada a sostener la convivencia de diversos sectores dentro de un marco de prosperidad alimentado por el dinero petrolero.

Estas ideas y concepciones iniciales tenían, sin embargo, dos fallas: Por un lado, el modelo de desarrollo basado en el petróleo, si bien fue capaz, por un tiempo, de impulsar un importante crecimiento, llevaba dentro de sí los virus propios del exacerbado peso de un sólo recurso en el proceso económico, del desbordado intervencionismo estatal, la asfixia del sector privado, la burocratización y la ineficacia que se derivan del centralismo y la constante multiplicación de las actividades gubernamentales en todos los ámbitos. Por otro lado, los pactos de élites, si bien tuvieron la ventaja de armonizar intereses a veces contrapuestos también intensificaron los controles políticos “desde arriba”, pasando así los partidos de ser instrumentos para la articulación y representación de intereses plurales a convertirse en meras maquinarias clientelares, destinadas a satisfacer apetencias y ejercer la demagogia.

El tipo de cultura política nutrida durante cuatro décadas por los partidos y sus líderes en Venezuela fue una cultura rentista y parasitaria, ajustada a esperar respuestas de parte de gobiernos paternos y dispendiosos, carentes por completo de un sentido de los límites presupuestarios, aun en condiciones de erosión del precio del petróleo y aumento de la carga de la deuda pública. Se

trataba de una cultura de derechos y no de deberes, de colectivismo y no de responsabilidad individual en la construcción del destino propio. Esa cultura política mesiánica y providencialista no sólo sobrevive, sino que de hecho se ha exacerbado en los tiempos de la “revolución bolivariana”.

Ahora bien, ya para diciembre de 1988, cuando Carlos Andrés Pérez resultó electo por segunda vez a la Presidencia de la República, Venezuela se hallaba prácticamente en bancarrota, con una inmensa deuda externa y las arcas del tesoro nacional vacías. Pérez alcanzó su victoria alimentando en el electorado la esperanza de que su nuevo gobierno reeditaría los tiempos de pasajera y distorsionadora bonanza que el país vivió durante su primera presidencia, entre 1974 y 1979. No obstante, en febrero de 1989, enfrentado a la realidad de una economía en ruinas, Pérez optó por acogerse a un riguroso “plan de ajustes”, del cual hasta entonces los venezolanos no habían oído hablar y para el cual no se encontraban preparados en lo más mínimo. Las élites del país, que le habían gobernado en medio de gran estabilidad por treinta años, jamás se habían planteado con decisión y claridad de propósitos el ineludible imperativo de diversificar la economía y reducir la dependencia petrolera. Cuando Pérez se atrevió a hacerlo, por necesidad y no por escogencia deliberada, sin para ello haber llevado a cabo previamente la indispensable labor de explicar al pueblo la nueva situación y persuadirle acerca del rumbo a tomar, se encontró de inmediato ante una comprensible reacción de estupor, seguida de indignación y rabia. Todo ello se tradujo en los motines masivos que asolaron Caracas y otras ciudades del país ese fatídico mes de febrero de 1989, con un saldo de centenares de muertos y del quiebre psicológico definitivo en el apego tradicional hacia el sistema político por parte de una población desencantada.

El gobierno de Pérez y su propia figura de líder quedaron heridos de muerte a partir de ese momento. Se abrió entonces la segunda grieta crucial en la muralla defensiva de la democracia establecida en 1958. Ya hemos visto que la primera tuvo que ver con el agotamiento paulatino del modelo de desarrollo sustentado en los ingresos fiscales derivados del petróleo. La segunda se manifestó en la división entre las élites. Los pactos vigentes en las primeras fases del sistema se habían sostenido con notable perseverancia, a pesar del deterioro económico y social, hasta la coyuntura de 1989; pero el estallido de la ira popular frente al programa “neoliberal” atemorizó los espíritus y resquebrajó las solidaridades. Con imperdonable miopía, en lugar de procurar un cambio que abriese los ojos de la gente con respecto al imperativo de buscar un nuevo rumbo económico, diversos factores fundamentales del sistema —el propio partido de Pérez, Acción Democrática, e individualidades de la relevancia de Rafael Caldera, ex-Presidente de la República y líder clave de la democracia cristiana, entre otros— se convirtieron en implacables enemigos del “paquete de ajustes”, enarbolando las confusas banderas del anti-neoliberalismo y dedicándose a llevar a cabo una oposición radical y desleal.

El hundimiento de Pérez y de su programa económico se aceleró con los golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992, el primero de ellos liderizado por Hugo Chávez Frías. En acto de irresponsable miopía moral pero de indudable eficacia política, Caldera apoyó a los alzados contra la democracia en un memorable discurso, y con ello dió comienzo al camino que le llevó a la reelección en 1993. En su figura paternal depositaron los venezolanos el ansia de regresar a un pasado que todavía añoran, el de las primeras tres décadas de la democracia fundada en 1958, tiempos en que, aparentemente, el petróleo y el populismo garantizaron la estabilidad, prosperidad y dicha de grandes sectores, que esperaban resucitarlos en las muy distintas circunstancias de los noventa. El inevitable fracaso de Caldera, quien trató de gobernar como lo había hecho entre 1968 y 1973, abstraído de las nuevas realidades mundiales y regionales, refugiado en las mismas convicciones y seguridades de un pasado que había hecho crisis terminal, y que ya era irrecuperable, ese fracaso —repito— creó las condiciones para la exitosa candidatura presidencial del Teniente-Coronel y ex-golpista Hugo Chávez, elegido Presidente con abultada mayoría en diciembre de 1998.

Podría decirse que el sistema democrático venezolano de 1958-98 no colapsó, ni fue destruido, ni tampoco fue asesinado. En realidad, los intentos de golpes de Estado de 1992 fracasaron militarmente, y sus líderes fueron apresados hasta que Caldera les indultó. El sistema pereció porque sus élites dominantes cometieron suicidio. Esta situación abrió paso a un enorme vacío político, pronto llenado por la figura mesiánica y en cierto sentido carismática de Hugo Chávez.

La elección de Hugo Chávez como Presidente de la República, en diciembre de 1998, marcó el final simbólico de cuatro décadas durante las cuales Venezuela vivió en democracia. Ciertamente, el sistema político inaugurado en 1958 caminó por un sendero complejo y en ocasiones tumultuoso, y las grandezas y miserias de su desarrollo han sido ampliamente discutidas. Para nuestros efectos inmediatos, tres puntos merecen destacarse: En primer lugar, y a diferencia de otros países latinoamericanos, el sistema político venezolano jamás experimentó los rigores de la hiperinflación o de programas de ajuste fondomonetaristas llevados a sus consecuencias extremas. La economía venezolana fue y sigue siendo una economía centrada en el petróleo y relativamente aislada de las corrientes predominantes en el resto de la región. En segundo lugar, y en buena medida como consecuencia del impacto del petróleo en la sociedad, la mayoría de los venezolanos está convencida de que el país es inmensamente rico, y espera del gobierno la rápida y eficaz satisfacción de sus muy infladas expectativas a través de la redistribución del flujo financiero derivado del factor petrolero. En tercer lugar, los golpes de Estado de 1992 fracasaron militarmente. La eventual conversión de este fracaso militar en victoria política se debió en buena medida a la división entre las elites dirigentes de la democracia, al agotamiento de los partidos

—que se habían convertido en meras maquinarias clientelares—, al desprestigio de los líderes tradicionales y en general a la incapacidad de esa dirigencia para asumir el desafío de decir la verdad a los venezolanos, de combatir los mitos predominantes en nuestra sociedad rentista, de luchar contra la corrupción y hacer cambios verdaderos en una dirección modernizadora.

El suicidio de las élites tradicionales abrió las puertas a Hugo Chávez. Este ex-militar golpista, luego de salir de la cárcel en 1995, comenzó una campaña a favor de la abstención electoral. No obstante, las circunstancias del país —la evidencia del masivo rechazo popular hacia los partidos y sus figuras políticas— le convencieron sobre las posibles ventajas de asumir el camino legal-electoral para alcanzar el poder. Los numerosos testimonios existentes acerca de las ideas y concepciones de Chávez en esos tiempos (1995-1998) revelan una personalidad mesiánica, formada en los marcos ideológicos de la izquierda latinoamericana de los sesenta y setenta, convencido sobre la necesidad de llevar a cabo una “revolución” en Venezuela, pero carente de un programa coherente y de una visión clara acerca del rumbo a seguir, una vez en el poder. Su triunfo electoral en 1998 fue el producto, por una parte, del cansancio popular, de la decepción del electorado con respecto a los resultados del período democrático y de la ausencia de liderazgos alternativos. Por otra parte Chávez fue capaz de transmitir un mensaje atractivo, mesiánico y providencialista, arremetiendo contra las llamadas “cúpulas podridas” de los partidos tradicionales y canalizando el resentimiento popular. Su programa —si es que puede dársele el título— ofreció en síntesis enterrar ese pasado e iniciar una “revolución”, la “revolución bolivariana”, a través de una Asamblea Constituyente.

El innegable respaldo popular de los primeros tiempos, sumado a los desplantes radicalizantes del líder, parecían presagiar cambios fundamentales. No obstante, el proceso bolivariano ha estado desde el comienzo signado por el equívoco y la ambigüedad. Para empezar, el electorado venezolano, si bien es cierto que aspiraba a un cambio en 1998, jamás ha identificado dicho propósito con la realización de una verdadera “revolución”, en el sentido, por ejemplo, en que la Revolución Cubana es una verdadera revolución. La realidad, tal vez patética pero realidad al fin, es que la mayoría de los venezolanos lo que efectivamente quiere es que el populismo-rentista funcione como una vez lo hizo, que el dinero petrolero fluya, que llegue a las manos de todos, que logremos prosperar sin demasiado esfuerzo, sin planes de ajuste, sin sacrificios incómodos, sin preocupaciones sobre productividad y competitividad —palabras todas que no existen en el léxico político del país.

La Constitución aprobada en marzo del 2000 por el régimen “revolucionario” sólo puede ser resumida con dificultades, en vista de la mezcla informe de ideas, tendencias y aspiraciones que encarna. Sin embargo, puede decirse que se trata en esencia de un texto presidencialista y centralista, que otorga especiales

privilegios a los militares. Las normas sobre ampliación de la democracia y creación de una “democracia participativa” se han visto, en la realidad, limitadas por una práctica abusiva y arbitraria del poder del gobierno, concentrado este último de manera creciente en la figura del Presidente y sustentado fundamentalmente en el apoyo militar al régimen. De hecho, Venezuela vive en un limbo jurídico, pues el gobierno —a pesar de haber aprobado una Constitución— insiste en la provisionalidad del derecho vigente, lo cual, desde luego, implica un panorama de absoluta incertidumbre para instituciones y ciudadanía por igual.

La retórica radical de Chávez se ha orientado en dos direcciones: En el ambiente interno ha procurado alentar las tensiones sociales, denunciando a los “oligarcas” y estimulando el odio entre pobres y ricos. En cuanto a la política exterior, Chávez ha convertido a Venezuela en el principal socio comercial de la Cuba castrista, ha apoyado a la guerrilla colombiana y se ha acercado a los regímenes anti-norteamericanos en el Medio Oriente, a China y Rusia, promoviendo la “multipolaridad” dentro de un esquema ideológico obviamente adverso a Washington. Estas posturas generaron serios temores, sobre todo en el interior de Venezuela, durante los dos primeros años de gobierno chavista; sin embargo, y a pesar de todos los desplantes y amenazas, ha existido una brecha entre la retórica revolucionaria y la realidad práctica. Chávez ha descubierto numerosos obstáculos y limitaciones en su sendero “revolucionario”, y el principal entre ellos no es otro que el rechazo popular a cualquier experimento similar al cubano. Los venezolanos aspiran que el sistema rentista-populista funcione como una vez lo hizo, redistribuyendo una riqueza petrolera que muchos creen infinita, mediante la acción de un gobierno paternal y eficiente. No desean una “revolución”. Tampoco quieren los venezolanos controversias con Washington, y el rechazo hacia Castro y sus ejecutorias en Cuba es generalizado.

De manera que el programa “revolucionario” está plagado de equívocos y contradicciones. Por un lado, Chávez ha intentado comportarse como si, en verdad, estuviese liderizando una revolución, y en ocasiones ha pretendido que la misma se proyecte a nivel regional; por otro lado, el pueblo espera resultados concretos en materia de aumento en su calidad de vida, creación de empleos, mejores salarios, multiplicación y mejoría de los servicios públicos, y reducción de la pobreza y delincuencia que azotan al país. Después de tres años de gestión, la carencia de resultados concretos en estos ámbitos ha erosionado seriamente la popularidad de que antes disfrutó Hugo Chávez. Los sectores más pudientes y gran parte de la clase media rompieron de modo decisivo con su gobierno hace rato, y la polarización ha escindido la sociedad venezolana al menos desde mediados de 1999.

¿Que el petróleo no es suficiente? ¿Que es necesario diversificar la economía?
 ¿Que la globalización ha generado nuevas exigencias a las sociedades que aspiran mejorar su calidad de vida? Nada de esto ha llegado a la conciencia de

la población en una sociedad acostumbrada por décadas al maná petrolero, y a la cual Hugo Chávez se ha cuidado mucho de no desengañar, reforzando más bien todos los mitos que conforman nuestra visión del mundo y de nuestro presuntamente privilegiado lugar en el mismo.

¿Revolución en Venezuela? A decir verdad, no ha habido ninguna, ni “bolivariana” ni de otro tipo; ha habido, sí, un cambio de actores, y el copamiento de la escena por parte de un militar populista con excepcionales dotes demagógicas, formado en la ideología izquierdista de los años sesenta y setenta, convencido de que, por ejemplo, la revolución castrista ha creado un “mar de felicidad” (sus propias palabras) en Cuba, y empeñado en desatar una cruzada contra el “neoliberalismo” y el “capitalismo salvaje”, a la vez que implora a los inversionistas extranjeros (norteamericanos incluidos) a traer su dinero al país.

La retórica inicial de Chávez, sus inocultables ambiciones de liderazgo regional, y diversas acciones ejecutadas durante las primeras fases de su gobierno —apoyo a movimientos subversivos en la región, diferencias con Washington, elogios a regímenes como el iraquí, el libio, el iraní y el cubano, estímulo interno a la lucha de clases y al odio hacia la “oligarquía”, autoritarismo y militarización del gobierno— dieron origen a justificados temores. Sin embargo, al equívoco inicial en medio del cual nace la “revolución bolivariana” —es decir, el equívoco derivado del hecho que los venezolanos no quieren una revolución, aunque Chávez parece creer que sí la desean— se añaden los obstáculos que el nuevo marco mundial y regional interpone a cualquier intento de repetir en América Latina los disparates revolucionarios que con tanta frecuencia en el pasado asolaron estas tierras. No es que tales disparates ahora sean imposibles, sino que su ejecución tropieza en las nuevas condiciones con múltiples dificultades, producto del panorama internacional globalizado.

Tanto en el plano interno como en el de la política exterior, por lo tanto, la experiencia chavista se ha caracterizado por la brecha entre las palabras y los hechos, entre la retórica y la realidad de una “revolución” que es en el fondo un espejismo que esconde una impostura: la de un líder que está demostrando, más allá de toda duda, enormes deficiencias y limitaciones como gobernante, que no ha logrado transformar sus exaltadas visiones en realizaciones concretas, que no ha conquistado en el exterior apoyos de significación, y cuya imagen ha perdido entre millones de venezolanos el brillo y el respaldo que una vez tuvo. Su “carisma”, carente del indispensable nutriente de las realizaciones concretas, ha empezado un patente sendero de declinación. En efecto, las encuestas, a partir de agosto-septiembre 2001 empezaron a indicar sin lugar a dudas que el apoyo a Chávez y su “revolución” está cayendo de manera importante, aun entre los sectores más pobres, en tanto que su gobierno y crecientemente su propia persona son culpabilizados por la recesión económica, el colapso de los servicios públicos, y el aumento exponencial de la inseguridad y la delincuencia.

Decir que la “revolución chavista” constituye un proyecto nacional medianamente coherente y ajustado a una evaluación realista del actual contexto internacional sería una grave exageración. En realidad, se trata de una confusa y anacrónica amalgama de buenos deseos combinados con consignas del marxismo ante-diluviano, todo ello aderezado con exhortaciones sacadas de los escritos de Bolívar y colocadas fuera de lugar en discursos infinitos, que ya cansan a la población. Chávez no ha logrado tampoco construir un nuevo esquema institucional, ni organizar un partido cohesionado que a la vez de servirle de sustento político a largo plazo le suministre cuadros para la administración del Estado. La relación “líder-masa”, que en los primeros tiempos del nuevo régimen le sirvió de sustento, ha cedido su lugar al dominio de un hombre cuya popularidad se reduce, y que se ve crecientemente obligado a confiar en los militares para gobernar y sostenerse en el poder. Entretanto, la oposición democrática apenas comienza a levantar cabeza, luego de los embates sufridos estos pasados años, con serios problemas de vacío de liderazgo y carencia de mensaje.

El resultado de todo esto nos muestra una sociedad invertebrada, con un andamiaje institucional sumamente precario (de hecho, el país vive oficialmente en estado de “provisionalidad” jurídica, a pesar de que existe una nueva Constitución), sin partidos políticos de calibre, sin líderes civiles fuertes, con una masa popular empobrecida, confundida e irritada que empieza a desencantarse del nuevo Mesías y que no ve otras opciones hacia adelante, y con unas Fuerzas Armadas colocadas por la dinámica de los eventos en el vértice de la dinámica política, a la espera de que el rumbo de los acontecimientos les indique dónde pueden y deben ir.

Hay que decir, ya para concluir, que el fin de la democracia tradicional venezolana en 1998, simbólicamente encarnado en la elección de Chávez, fue esencialmente el resultado de la timidez, miopía política e irresponsabilidad ética de las élites dirigentes, especialmente de la dirigencia política de Acción Democrática y Copei, por su incapacidad de ejercer el liderazgo de las ideas con respecto a una población que vivía y vive engañada y adormecida, y a la cual jamás se ha procurado despertar para que enfrente creativamente las realidades del mundo en que existimos. Esa irresponsabilidad moral y ese fracaso político han colocado a Venezuela en el trance en que se encuentra, y que se patentizó trágicamente en los eventos del 11 al 14 de abril de este año (2002), cuando estallaron las contradicciones y tensiones generadas por el régimen “revolucionario”. Esos días fueron testigos de una masiva rebelión civil, un vacío de poder, varios pronunciamientos militares, y la fugaz salida de Chávez de la Presidencia sólo para volver a ella del brazo de los militares, quienes en primer término le habían conminado a abandonarla.

Estos condusos episodios no deben ocultar la realidad clave de que la permanencia de Chávez en el poder se encuentra ahora sujeta a condiciones

muy adversas para él y su gobierno, sometidos a una mayor tutela militar y a la cuidadosa atención de organismos regionales como la OEA, de Washington, y de otros países del hemisferio, que han alertado a Chávez acerca de la necesidad de gobernar democráticamente, a riesgo de que se repitan los sucesos que le arrojaron de la Presidencia.

Desafortunadamente para Venezuela, la oposición democrática no ha sido todavía capaz de consolidar una alternativa hacia adelante. El panorama actual de nuestra sociedad presenta un resquebrajamiento sustancial de todas las instituciones, así como de los liderazgos civiles tradicionales, sin que hayan surgido aun otros de significación. Los partidos de siempre, en particular Acción Democrática y Copei, se han deteriorado seriamente, y sólo la Fuerza Armada Nacional mantiene un grado importante de solidez y cohesión institucional, pese a crecientes tensiones internas suscitadas por la polémica en torno a su papel dentro del “proyecto revolucionario”.

En tales circunstancias, los escenarios políticos para Venezuela se presentan con grandes sombras y presagian tormentas. Chávez no ha hecho una “revolución”, pero tampoco ha logrado concentrar sus energías en una obra de gobierno “normal”, por decirlo de algún modo. El creciente rechazo a su gestión, la hostilidad profunda y radical hacia su persona y su gobierno por parte de los sectores medios, técnicos y profesionales en general, así como de gran parte del empresariado privado, y las controversias que genera una política exterior que busca alianzas con los enemigos de Washington a la vez que, de manera contradictoria, intenta preservar la buena voluntad del coloso del norte, todo esto —repito— está dando forma a un contexto político caracterizado por un creciente vacío y unas casi intolerables incertidumbre e ingobernabilidad.

La carencia de solidez intelectual del proyecto “revolucionario”, los obstáculos que el contexto internacional vigente impone a los radicalismos ideológicos, la desorganización de su partido político, la generalizada incompetencia del gobierno, y el gradual deterioro de su imagen están conduciendo a Hugo Chávez a apoyarse cada día más en la Fuerza Armada como pilar de sustentación de su mando. La pérdida de popularidad en el plano interno, y el endurecimiento de la línea de Washington hacia regímenes percibidos como hostiles, podrían tentar a Chávez a radicalizarse, lo cual posiblemente tendría serias repercusiones negativas en la cúpula militar. En caso de escoger una línea de moderación en adelante, Chávez va a enfrentar, sin embargo, una intensificación de las tendencias adversas ya presentes hacia su imagen personal y la de su gobierno. En tal caso, es razonable prever que el rumbo de tutelaje militar sobre la política y la sociedad venezolanas se agudice en los próximos tiempos, con o sin Chávez a la cabeza. Ello dependerá de su prudencia en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, de su capacidad para no atizar aun más los conflictos internos, y para evitar que la insatisfacción popular se traduzca en nuevas protestas masivas.

En todo caso, y en vista de que las próximas elecciones todavía se encuentran a cuatro o cinco años de distancia, la tarea de la oposición democrática es construir una alternativa válida frente a Chávez. Se están haciendo esfuerzos, pero los resultados son aun precarios y poco alentadores. Sobre todo, no pareciera que el pueblo venezolano esté experimentando un proceso de aprendizaje creador estos tiempos, y no sería sorprendente que el fracaso de Chávez, un fracaso que a todas luces se avecina, conduzca eventualmente a los sectores mayoritarios a perseguir otro espejismo mesiánico, otra ilusión óptica en la cual depositar un cúmulo de renovadas frustraciones.